

la quejosa, y considerando: que en el expediente aparece que Perez es casado y mantiene á su familia, así como á la madre de él: que por lo mismo resulta que su consignacion al servicio militar es contraria á lo que dispone la ley de 17 de Mayo último y vulnera la garantía á que se refiere el art. 5º de la Constitucion Federal, se decreta: Que se confirma la sentencia pronunciada el 5 del presente por el juez 1º de Distrito de esta ciudad que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege á José Simon Perez contra el acto que motivó la interposicion de este amparo.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Diciembre 4 de 1872.—*Lic. Agustin Peraltá*, oficial mayor.

AMPARO promovido ante el Juzgado de Distrito de Chiapas, por Carlos Thiele, ciudadano americano, vecino de la ciudad de Comitán, contra actos del Alcalde 2º de esa ciudad, y jueces de 1ª instancia de aquel departamento, por violacion de garantías.

FEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez de Distrito:

Con fecha 19 de Setiembre próximo

pasado, el extranjero D. Carlos Thiele, despues de un tejido de quejas confusas que narra para que se descifren y que ya en otros ocursos las ha asentado, de las cuales unas están ya resueltas y otras por resolverse, pide que la Justicia Federal le ampare en virtud de que los jueces de la ciudad de Comitán han violado en su persona la parte última del art. 19 de la Constitucion nacional, haciéndole sufrir molestias y maltratos en la cárcel donde se halla preso.

Pedido informe con justificacion al de 1ª instancia de este lugar, lo rindió con fecha 26 del mismo mes, y en él, con los respectivos comprobantes desbarata el círculo de denuncias que hace el quejoso, no obstante que, para el caso en cuestion poco conducen, pues tales maltratos, si los hubo, constituirian un motivo de responsabilidad del juez hácia su superior, mas de ninguna manera un objeto de amparo, toda vez que en caso afirmativo, serian del todo irreparables, y el objeto del recurso es volver las cosas á su primitivo estado.

El quejoso, aunque en su ocursio ha hecho otra indicacion de estar violado el expresado art. 19, por haber sido arrestado sin mandamiento escrito de autoridad competente, la desvirtúa ó nulifica por completo, presentando como lo ha hecho el auto que funda y motiva dicha prision; y ya por esto como por el tema de su peticion, solo debe atenderse á los maltratos que expresa, los cuales segun se ha insinuado, en su inquisicion y castigo corresponden á la autoridad ordinaria y de ninguna manera á la que vd. dignamente ejerce.

Por lo expuesto, y en virtud de las constancias á que el Promotor se refiere, pide al Juzgado declare sin lugar dicho recurso de amparo que solicita el extranjero D. Carlos Thiele, como impropio.

San Cristóbal Las Casas, Octubre 14 de 1872.—(Firmado.)—*Carlos Ballinas.*

SENTENCIA del ciudadano juez de Distrito.

Juzgado de Distrito de Chiapas. San Cristóbal Las Casas, Octubre 28 de 1872.—Visto este juicio de amparo interpuesto en 19 de Setiembre anterior, por D. Carlos Thiele, mayor de edad y del vecindario de la ciudad de Comitán, cabecera del departamento del mismo nombre, contra actos del Alcalde 2º de dicha ciudad, C. Pedro Vivez, y de los jueces acompañados de 1ª instancia del propio departamento, CC. Vicente García y Moisés Rojas, pretendiendo estar violados: 1º: el art. 19 de la Constitución, con los procedimientos bárbaros é inquisitoriales, que expresa han ejercido contra él, los tres jueces citados, puesto que dicho artículo dice: que todo maltratamiento en la prision y toda molestia sin motivo legal, es un abuso que deben corregir las leyes: 2º: la fracción 4ª del art. 20, porque con tales procedimientos se le pone en la imposibilidad física y moral de hacer valer sus derechos de defensa: 3º: el art. 18, porque habiendo pedido su excarcelacion bajo de fianza, no le ha sido concedida; y 4º: el art. 16, por haber el Alcalde 2º y el 2º de dichos jueces de 1ª instancia, violado su domicilio, arrestándolo sin mandamiento de autoridad competente; y haber mandado atentar contra su vida, por cuyos motivos concluye acusando formalmente al referido Alcalde 2º por ser el instigador de tales crímenes. Visto el informe justificado del juez de 1ª instancia; lo pedido por el Promotor fiscal; el auto de citacion para definitiva y cuanto mas verse debia. Considerando: que no pueden decirse violadas la primera y la segunda parte del art. 19 de la Constitución, porque el mismo quejoso ha acompañado copia del auto de formal prision contra él decretado, el cual consta á fojas dos de este expediente; y que si los jueces contra quienes se querella le han inferido malos

tratamientos y molestias en su prision, sin motivo legal, bien podrá esto dar margen á demandar su responsabilidad ante quien corresponda, mas no ser caso de amparo, porque teniendo este por objeto restituir las cosas á su estado primitivo, no podría obtenerse este resultado respecto de hechos consumados, aun en el supuesto de ser estos ciertos. Considerando: que tampoco puede estimarse violada la fraccion 4ª del art. 20 que, refiriéndose á que se faciliten á todo acusado en juicio criminal los datos que necesite y consten en el proceso para preparar sus defensas, no hace mérito el quejoso de haberlos pedido, ni de que se le hubiesen negado, refiriéndose únicamente á los procedimientos de los expresados jueces para suponerse en imposibilidad física y moral de hacer valer sus derechos de defensa: deduciéndose de esto que no hay violencia alguna que pueda constituir la violacion de la citada fraccion 4ª del art. 20. Considerando: que menos puede decirse violado el art. 18, porque siendo atribucion del juez que conoce de una causa criminal, estimar la procedencia ó improcedencia de la excarcelacion bajo de fianza que solicite un acusado, quien en el caso de una decision ilegal tiene para corregirla los recursos que otorga el derecho comun; en la denegacion de que se queja el promovente, no hay tampoco violencia alguna que constituya una violacion de garantías. Considerando: que asimismo no existe la del art. 16, por que si, como el mismo quejoso expresa, fué aprehendido por los referidos jueces, eran ellos los competentes para proceder, y no necesitaban de orden escrita que motivara la causa de su procedimiento; fuera de que, siendo clara su intencion de acusar como formalmente acusa al Alcalde citado, el conocimiento de tal acusacion no corresponde al Juzgado de Distrito, ni ella en tal caso es ni puede ser materia de un juicio de

amparo. Considerando: que aunque el promovente ha protestado por no haber sido admitido á dar pruebas, y no habérsele dado á conocer las declaraciones de la parte adversaria; semejante protesta, es de estimarse de ningun momento; 1º: porque estando reservado al juez mandar recibir el negocio á prueba, si creyere necesario esclarecer algun punto de hecho, no ha creído debido hacerlo en el caso presente, por ser claros los puntos sobre que debía versar esta resolución; y 2º: porque aunque manifiesta que se le han rehusado las declaraciones de la parte adversaria, habiéndolas pedido formalmente; ni es exacto que haya hecho gestion alguna sobre el particular, ni aun cuando la hubiera intentado debía accederse á ella, porque ni la autoridad informante es parte, ni su solicitud sería conforme en nada á las prescripciones de la ley reglamentaria del presente juicio. Considerando finalmente: que por falta de motivo justificado no se puede decretar el amparo que solicita, y que en este concepto debe reputarse al quejoso incurso en la pena designada en el art. 16 de la ley de 20 de Enero de 1869. Con fundamento de la misma y de conformidad con lo pedido por el Promotor fiscal, se declara: que la Justicia Federal no ampara ni protege á D. Carlos Thiele, por no existir la violacion de garantías que reclama, quedando obligado á satisfacer la multa de la cantidad de cien pesos, minimum de la que la ley señala, y la cual satisfará siempre que el presente fallo merezca la aprobacion de la Corte Suprema de Justicia, á quien se elevarán estas actuaciones para su revision, con copia del pedimento fiscal y de la presente sentencia, para que se publique en el *Semanario Judicial*, haciéndose saber á quienes corresponda.

Así lo proveyó, mandó y firmó el C. Lic. Juan José Ramírez, juez de Distrito del Estado, ante el infrascrito es-

cribano del despacho, que da fé.—(Firmados.)—*Juan J. Ramírez.—J. Crisóstomo Lara.*

Son copias que certifico. San Cristóbal Las Casas, Octubre 28 de 1872.—*J. Crisóstomo Lara.*

EJECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

Mexico, Noviembre 30 de 1872.—Visto el juicio de amparo que en 21 de Setiembre último, promovió en San Cristóbal Las Casas, ante el juez de Distrito de Chiapas, Carlos Thiele ciudadano americano, vecino de la ciudad de Comitán, cabecera del departamento del mismo nombre, contra actos del Alcalde 2º de esa ciudad, C. Pedro Vivez, y de los jueces acompañados de 1ª instancia de aquel departamento, CC. Vicente García y Moisés Rojas, por cuyos actos afirma el promovente que se han violado en su persona las garantías otorgadas por la Constitucion de la República, en sus artículos 19 y 20, fraccion 4ª, 18 y 16, porque estando preso Thiele, á consecuencia de una causa que se le sigue por violacion de correspondencia, alega, que se le da maltrato, se le pone en imposibilidad de defenderse, no se le ha concedido la libertad en fiado que ha pedido, se le arrestó sin mandamiento expreso de autoridad competente, y se ha atentado contra su vida. Visto el informe con justificacion que ha rendido la autoridad responsable de los actos que se reclaman; lo pedido por el Promotor fiscal sosteniendo la improcedencia legal del recurso intentado; lo alegado por el quejoso así en el ocurso del juicio como ante esta Suprema Corte de Justicia, y la sentencia que pronunció el juez de Distrito negando el amparo, atento entre otros fundamentos á que los de la queja segun las constancias de autos, no son ciertos.

Por esa razon del juez de Distrito, y con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869: Es de confirmarse y se confirma la sentencia del mismo juez, dada en la referida ciudad de San Cristóbal Las Casas, á 28 de Octubre próximo pasado, declarándose: que la Justicia Federal no ampara ni protege á D. Carlos Thiele, por no existir la violacion de garantías que reclama.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia, para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados-Unidos mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Diciembre 6 de 1872.—*Lic. Agustín Peraltá*, oficial mayor.

AMPARO promovido ante el Juzgado de Distrito de Puebla, por el Presbítero D. Francisco Porras, contra el Ministerio de Hacienda que declaró nacionales los bienes de D. Antonio, D. Mariano y D^a Dolores del Portal.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez 3º suplente de Distrito:

En el juicio de amparo que ha intentado el Sr. Presbítero Lic. D. Francisco Porras, contra el Ministerio de Hacienda y crédito público, en diversos lugares del expediente pedí que se le diera entrada al recurso, por no considerar

competente al Juzgado para conocer de él, en virtud de que no se habia promovido contra una autoridad establecida en la capital de la República, que habia mandado ejecutar el acto reclamado á otra perteneciente al Estado de Tlaxcala, cual es la Gefatura de hacienda de aquel lugar. Insistí despues en dicho pedimento, por las razones que se leen en mi escrito de fojas 60 y 80; pero como la Corte Suprema de Justicia haya devuelto los autos para que el recurso se tramitara con arreglo á la ley de 20 de Enero de 1869; y como consecuencia de esto vd. lo mandó abrir á prueba y concluido que ha sido el término se ha reservado en la secretaría para que se alegue por los interesados, con el fin de resolver sobre lo principal; cumpliendo pues con los deberes de mi representacion, paso á ocuparme del negocio en su esencia, aceptando todo aquello que tiene verdadera relacion con el amparo, y haciendo á un lado la multitud de inconducencias promovidas por el referido Presbítero, que ni son favorables ni adversas á los intereses que se discuten.

Bajo este supuesto, diré que el C. Lic. Porras se queja en su ocurso que dió origen á este juicio, contra el Ministerio de Hacienda, porque ha resuelto que son denunciabiles y redimibles los bienes pertenecientes á la testamentaria de D. Antonio Portal, que consisten en un capital de cuarenta mil setecientos y tantos pesos que se reconoce en la Hacienda de Santa Ana Atoyazolco sita en jurisdiccion de Tlaxcala y el valor de la casa núm. 13 de la calle del costado de San Pedro de esta ciudad, cuya resolucion dictó, segun expresa, de un modo irregular, por no haber estado la denuncia del C. Melquiades Carbajal arreglada á la circular de 9 de Agosto de 1869. De este hecho infiere, que hubo infraccion de los arts. 14, 16 y 27 de nuestro código constitucional.

Esto es lo principal que abraza el pa-